



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/WG.6/2/FRA/3
3 de abril de 2008

ESPAÑOL
Original: FRANCÉS/INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Segundo período de sesiones
Ginebra, 5 a 16 de mayo de 2008

**RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c)
DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS**

Francia *

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones presentadas por 20 interlocutores¹ para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. Como la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal, la información recogida en este informe se refiere principalmente a hechos ocurridos después del 1° de enero de 2004.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. ANTECEDENTES Y MARCO

1. Defensa de los Niños - Movimiento Internacional, sección Francia (DEI), observó que en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores no había ninguna información sobre el Examen Periódico Universal. DEI observó que funcionarios de distintos ministerios habían preparado un documento que fue armonizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y sometido a la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH). Según DEI, no hay indicios de una voluntad de consulta más amplia con las comunidades locales o la sociedad civil (salvo con sus representantes en la CNCDH). DEI indicó que sería interesante determinar si se consultó a las instituciones independientes de derechos humanos, como son la Defensoría (Médiateur de la République), la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité (HALDE) o la Defensoría de los Niños².

A. Alcance de las obligaciones internacionales

2. Amnistía Internacional (AI) pidió a Francia que firmara y ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares³. La CNCDH también deploró que Francia no hubiera firmado ese tratado. AI⁴, la CNCDH⁵ y la Federación Internacional de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura⁶ (FIACAT) también pidieron a Francia que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. AI recomendó además la ratificación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y pidió a Francia que retirara sus reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer⁷. La CNCDH indicó que también había pedido a Francia que retirara la declaración formulada en virtud del artículo 124 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) y deploró el retraso en la incorporación integral del Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico nacional⁸. A ese respecto, la FIACAT observó que el Ministro de Justicia había presentado a la Asamblea Nacional en 2006 un proyecto de ley para armonizar el derecho francés con la institución de la CPI, proyecto que según la FIACAT no se incluyó nunca en el orden del día y en 2007 fue retirado para someterlo al Senado. Al 30 de enero de 2008 no se había incluido todavía en el orden del día. El texto de ese proyecto de ley fue sometido a la CNCDH, que emitió un dictamen muy crítico en 2006⁹. En cuanto a la aplicabilidad de la Convención sobre los Derechos del Niño, DEI deploró que, si bien la jurisprudencia del Tribunal de Casación había progresado notablemente en 2005, la postura ambigua del Estado a ese respecto ha hecho que no se reconozca (o se reconozca sólo muy parcialmente) el carácter normativo y jurídicamente vinculante de la Convención. DEI considera que el Consejo Constitucional debería tener la facultad de rechazar las disposiciones de leyes nuevas que no sean conformes a los tratados internacionales debidamente ratificados¹⁰.

B. Marco constitucional y legislativo

3. DEI observó que después de los notables esfuerzos de los años noventa para armonizar el derecho nacional con la Convención sobre los Derechos del Niño, la tendencia parece ir ahora en sentido contrario. Así DEI ha observado una falta de coherencia entre las distintas leyes que, a su juicio, crea una confusión perjudicial para el respeto de los derechos del niño. La misma organización no gubernamental señaló que también hay indicios preocupantes de que algunas leyes en preparación, supuestamente para proteger a los niños, son contrarias a los principios fundamentales de los derechos humanos.

C. Estructura institucional y de derechos humanos

4. Según la CNCDH, últimamente se han multiplicado en Francia las "autoridades administrativas independientes" encargadas de proteger los derechos de los ciudadanos. Las principales son el Médiateur de la République, el Comité consultatif national d'éthique (CCNE), la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) y la Defensoría de los Niños. La creación de la HALDE en 2006 es, según la CNCDH, un paso particularmente importante, al igual que la Ley de 2007 que instituye la función de Controlador General de lugares de detención. La CNCDH indicó que asume esas responsabilidades con espíritu de independencia y pluralismo y que ejerce plenamente su facultad de emitir dictámenes por propia iniciativa, aunque su papel tenga carácter meramente consultivo. También emite dictámenes sobre asuntos sometidos a su examen por el Gobierno, pero observa una disminución notable del número de estos asuntos y recientemente lo deploró enfáticamente¹¹. La CNCDH lamentó el seguimiento insuficiente de sus dictámenes, aunque la cooperación ha sido generalmente satisfactoria¹². DEI considera que la influencia de la CNCDH sigue siendo limitada, en parte debido a su función consultiva y también porque sus dictámenes no se respetan necesariamente¹³. Según la asociación general de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (Inter-LGTB), el presupuesto de la HALDE es muy inferior al de otras estructuras equivalentes de otros países de la Unión Europea¹⁴. DEI observó que el Defensor de los Niños es nombrado en el Consejo de Ministros y que los parlamentarios pueden censurar su presupuesto (estuvieron a punto de hacerlo en 2005)¹⁵.

D. Medidas de política

5. La CNCDH indicó que recientemente había recomendado al Gobierno la organización de una consulta nacional con miras a la adopción de un plan nacional de acción sobre los derechos humanos¹⁶. DEI señaló que si bien es demasiado pronto para evaluar su función, la reciente creación del cargo de Secretario de Estado para los Derechos Humanos, entre cuyas prioridades declaradas figuran los derechos de los niños, es un paso en la dirección indicada¹⁷.

II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

6. La FIACAT observó los frecuentes retrasos en la presentación de informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas¹⁸. La CNCDH señaló que los poderes públicos no siempre tienen en cuenta debidamente las observaciones formuladas por esos órganos¹⁹. La FIACAT observó que es frecuente que el Gobierno no tenga en cuenta las medidas provisionales dictadas por el Comité contra la Tortura. En 2006, por segunda vez, Francia se negó a reconocer la autoridad de las medidas provisionales dictadas por el Comité. La FIACAT destacó que en 2007 el Comité había condenado a Francia por la expulsión de un tunecino, en violación de una recomendación hecha en 2006²⁰.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

7. La CNCDH observó que Francia dispone de un instrumento legislativo importante de lucha contra el racismo, el antisemitismo y la discriminación. Los poderes públicos contribuyen a la

financiación de diversas asociaciones competentes en la materia. La CNCDH observó que los actos racistas señalados a las autoridades habían disminuido regularmente desde 2005. La CNCDH deploró que la lucha contra el racismo y el antisemitismo estuviera "diluida" entre las medidas de lucha contra la violencia en general y que no fuera objeto de suficientes medidas específicas y concertadas²¹. En 2006 el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó que Francia redoblara esfuerzos contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, que aplicara de una forma más eficaz la legislación vigente y castigara a los autores de actos de racismo, antisemitismo o xenofobia²². La Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC) observó que de los 220.000 casos de discriminación registrados en Francia en 2006, sólo 43 habían sido juzgados y que los resultados de los litigantes en los tribunales no eran alentadores. Según la IHRC, es discutible que la HALDE sea, como afirma el Gobierno de Francia, una institución eficaz contra la discriminación, en particular contra las mujeres de color, principalmente porque el Gobierno revocó la facultad de sanción inicial de la HALDE²³. Inter-LGTB informó de que el Código Penal y la legislación sobre el trabajo y la vivienda definen la discriminación e incluyen distintos motivos, entre ellos las costumbres y la orientación sexual, y desde 2004 aplican las mismas disposiciones para toda forma de discriminación. Desde 2005, las agresiones verbales cometidas en la calle o en el lugar de trabajo y motivadas por la orientación sexual, el sexo o una discapacidad se castigan con mayor rigor que un simple insulto. La identidad de género no es un motivo de discriminación reconocido en el derecho francés²⁴.

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

8. AI indicó que el Código Penal no contiene una definición de la tortura conforme a la definición de la Convención contra la Tortura, lo cual es, en su opinión, un posible obstáculo para una protección adecuada²⁵. AI informó que había documentado durante muchos años la respuesta de las autoridades a las alegaciones de tortura, malos tratos y recurso excesivo a la fuerza, que incluyen casos de posibles homicidios al margen de la ley cometidos por las fuerzas del orden. Según AI, las investigaciones internas de la policía, así como las facultades discrecionales del fiscal, hacen que muchos enjuiciamientos resulten ineficaces, y muchas causas han sido archivadas sin llegar a los tribunales, aun cuando había pruebas verosímiles de una violación. AI indicó que incluso cuando las causas eran examinadas en los tribunales, las sentencias condenatorias eran relativamente raras y en esos pocos casos las penas eran nominales la mayoría de las veces. AI llegó a la conclusión de que la negligencia constante del Gobierno frente a estas violaciones había propiciado un clima de impunidad de hecho para las fuerzas del orden. El racismo es una de las principales características de muchos de los casos examinados por AI, en la mayoría de los cuales el afectado no es de origen europeo sino, generalmente, norteafricano o subsahariano²⁶. La FIACAT recordó que, según el Gobierno francés, actualmente se experimenta la utilización de pistolas de descarga eléctrica en tres establecimientos penitenciarios, pese a la postura del Comité contra la Tortura que afirmó que la utilización de armas eléctricas no mortales "*provoca un dolor agudo que constituye una forma de tortura*", que vulnera los artículos 1 y 16 de la Convención²⁷.

9. La sección francesa del Observatoire international des prisons (OIP) indicó que la situación de las cárceles, denunciada ya en dos informes parlamentarios en 2000, había empeorado mucho estos cuatro años como consecuencia de una política penal orientada al encarcelamiento, que provoca una fuerte inflación carcelaria y cifras récord de hacinamiento de detenidos, y una política penitenciaria centrada en el fortalecimiento de la seguridad. Los gobiernos sucesivos no atendieron las recomendaciones de las instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos²⁸. La FIACAT indicó que un informe de 2007 del Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) invita nuevamente a Francia a afrontar resueltamente el problema del hacinamiento de las cárceles²⁹. El OIP observa que la inflación carcelaria observada desde 2002 empeoró fuertemente en 2007, alcanzando este año la cifra histórica de 65.046 detenidos, lo que supone un

aumento del 22,3 % desde 2002. Al 1° de enero de 2008 el número de detenidos superaba en 11.948 al número de plazas disponibles³⁰, según la FIACAT. Esto significa una media de cuatro personas detenidas en 9 m². Este hacinamiento afecta considerablemente a las condiciones de detención, con establecimientos inadaptados y vetustos, condiciones generales de higiene insuficientes y dificultades de atención de salud que generan una tensión creciente en las relaciones entre vigilantes y detenidos y entre los mismos detenidos³¹. El OIP señala que el Ministerio de Justicia dio a conocer en julio de 2007 proyecciones de 80.000 detenidos en 2017³².

10. Según la FIACAT, el personal penitenciario se ve obligado a recurrir a la fuerza en ciertas situaciones. La FIACAT indicó que la medida de aislamiento de un recluso, inicialmente de tres meses, puede prolongarse indefinidamente por motivos de protección o seguridad. Además de la duración ilimitada, las condiciones de detención en régimen de aislamiento son particularmente difíciles y pueden asimilarse a un trato cruel, inhumano y degradante según la FIACAT. La Federación señaló que el Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) tuvo conocimiento, durante su visita a Francia en 2006, de una persona que llevaba 19 años en régimen de aislamiento. La FIACAT recordó que el CPT ha observado que la medida de aislamiento también se utiliza para detenidos que necesitan atención psiquiátrica urgente³³. En 2006 el OIP sometió a la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) cinco casos de actos de violencia voluntarios cometidos por los vigilantes contra los reclusos del centro penitenciario de Liancourt. La CNDS observó que en esta cárcel imperaba un clima general "*de miedo, represalias y vejaciones*", de actos que se cometen para imponer "*el terror y el orden*"³⁴. Según la FIACAT, hay un desfase flagrante entre la teoría y la práctica del derecho que tienen todas las víctimas de actos de violencia cometidos por un representante de la fuerza pública a presentar una denuncia³⁵.

11. La FIACAT observó que la enmienda del Código de Procedimiento Penal, en 2004 y 2006, prolongó el plazo de detención policial de una persona sin derecho a consultar a un abogado³⁶. En 2006 el CPT expresó a las autoridades francesas su preocupación por esas modificaciones que prolongan la duración máxima de la detención policial hasta 144 horas (seis días) en algunas circunstancias excepcionales y aplazan hasta cuatro días la posibilidad de intervención de un abogado. Según el CPT, si se prevé prolongar la duración máxima de detención policial, habría que reforzar las garantías fundamentales³⁷. El Gobierno respondió al CPT en esta materia³⁸. En 2006 el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó una reforma de la normativa sobre participación de un abogado durante la detención policial y pidió que la asistencia letrada se estableciera como una obligación³⁹. AI recomendó una reforma de la legislación para garantizar los derechos de los detenidos a una asistencia letrada eficaz, que incluye el derecho a consultar a un abogado desde que se produce la detención policial y durante todo el tiempo de detención⁴⁰. La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) observó que se habían reducido las garantías judiciales en los textos vigentes, en particular que se permitía la detención provisional cuando la pena era superior a tres años. La LDH también expresó su preocupación por el restablecimiento del criterio de alteración del orden público y el aumento de poderes del Ministerio Público⁴¹. Human Rights Watch (HRW) señaló con preocupación que la falta de garantías durante la custodia policial afecta al derecho de los detenidos a una defensa efectiva en una fase crítica⁴². La organización también observó que el enfoque de la justicia penal francesa para combatir el terrorismo está basado en un sistema centralizado en el que los jueces de instrucción especializados tienen poderes amplios y pueden ordenar la detención policial (*garde à vue*) de un presunto delincuente durante seis días y acusarlo de un impreciso delito de "asociación criminal para cometer actos de terrorismo" (*association de malfaiteurs*). Con frecuencia, la investigación de supuestas redes de terrorismo internacional en Francia puede durar varios años y durante ese tiempo muchas personas son detenidas, sometidas a interrogatorios y retenidas preventivamente con pruebas mínimas, incluso los cónyuges o parejas de los principales sospechosos⁴³. La acusación de "*association de malfaiteurs*", piedra angular del modelo francés de lucha preventiva contra el terrorismo, ha sido

criticada por arbitrariedad y falta de certidumbre jurídica, según HRW. A la organización le preocupaba que, según sus investigaciones, la definición demasiado amplia del delito, combinada con la admisión de pruebas mínimas para proceder a la detención preventiva, da lugar a que estas personas se encuentren en situaciones equiparables a una detención administrativa ilegal⁴⁴.

12. AI observó que muchas veces había llamado la atención sobre el problema de la violencia contra la mujer en Francia. Afirmó que, según los datos oficiales, 127 mujeres fueron muertas por su pareja en 2006 y observó que casi 1 mujer de cada 10 era víctima de la violencia en el hogar en Francia. Los procedimientos judiciales son lentos y complejos y las mujeres migrantes afrontan mayores dificultades⁴⁵. Según la Iniciativa Mundial para Acabar con Todo Castigo Corporal Hacia Niños y Niñas (GIEACPC), el castigo corporal en el hogar es lícito porque el derecho consuetudinario concede a los padres un "derecho de imponer castigos corporales". El Código Penal ofrece una protección limitada a los niños y la GIEACPC observó que los resultados de las investigaciones realizadas indican que el castigo corporal es muy común. Indicó que las leyes no prohíben explícitamente el castigo corporal en las escuelas y establecimientos de atención especial.⁴⁶

3. Administración de justicia y estado de derecho

13. La CNCDH observó que recientemente se habían iniciado muchas reformas en la administración de justicia, en la mayoría de los casos con ocasión de leyes de circunstancia. Afirma que el resultado de esas reformas es un Código de Procedimiento Penal cada vez más complejo, la restricción de algunos derechos fundamentales en un contexto de crecientes medidas de seguridad pública y el debilitamiento de principios fundamentales como el de no retroactividad de la ley penal. La CNCDH ha expresado su preocupación al Gobierno en varias ocasiones en el marco de la lucha contra la reincidencia y la delincuencia, en particular en lo referente al principio de la estricta necesidad y la proporcionalidad de las penas⁴⁷. La LDH⁴⁸ y el OIP⁴⁹ observaron durante los últimos cinco años una degradación de los derechos y las libertades que no tiene precedentes desde 1945. Según la LDH, la justicia es cada vez más expeditiva, las penas son cada vez mayores y las cárceles están cada vez más llenas. En cuanto a la prevención de la delincuencia, en particular de menores, la LDH afirma que está siendo reemplazada por un dispositivo de creciente represión cuyo único indicador de éxito es el número de personas detenidas⁵⁰. El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmó en 2006 que la modificación cada vez más rápida de las leyes puede crear a largo plazo un problema de inseguridad jurídica, porque los juristas no tendrán tiempo para prepararse para la entrada en vigor de nuevas disposiciones⁵¹. La CNCDH deploró las numerosas modificaciones del reglamento de 1945 sobre la delincuencia de menores, recordó que ese reglamento da prioridad a la educación sobre la represión y afirmó el principio del privilegio de jurisdicción (jurisdicción especializada del tribunal y los jueces de menores). La CNCDH destacó que esas medidas, en particular el hecho de que la circunstancia atenuante de ser menor de edad sea ahora una excepción y no la regla cuando el menor tiene más de 16 años, son contrarias al espíritu de los textos internacionales, conforme a los cuales la justicia aplicada a los menores de 18 años debe tener en cuenta las particularidades de la edad y sólo debe recurrir al encarcelamiento excepcionalmente⁵². La LDH expresó su preocupación por motivos similares⁵³.

4. Libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

14. El Institute on Religion and Public Policy (IRPP) observó que el Gobierno generalmente respeta la libertad de religión en la práctica y la libertad de practicar cualquier religión. No obstante, observó la preocupación de algunos grupos religiosos y de derechos humanos por las leyes aprobadas en 2001 y 2004 que prevén la disolución de grupos en determinadas circunstancias

y prohíben que el personal y los alumnos lleven símbolos religiosos ostensibles en las escuelas públicas⁵⁴. La organización Becket Fund for Religious Liberty (BFRL) señaló que la Ley de 1905 de separación de la iglesia y el Estado ("*loi sur la laïcité*") seguía vigente, y que la interpretación del principio de estricta separación de la iglesia y el Estado se traducía en una limitación de las expresiones religiosas en los lugares públicos. Según BFRL, los efectos de esta aplicación han sido muy difíciles para las minorías religiosas como el islam y los nuevos movimientos religiosos⁵⁵. El IRPP señaló que la Ley de 2004 prohibió todos los símbolos religiosos ostensibles, incluido el velo islámico, la kipá judía, el turbante *sikh* y la cruz cristiana de grandes dimensiones. Según el IRPP, la ley pretende crear unas condiciones de neutralidad y tolerancia religiosa en las escuelas públicas, pero ha generado controversia e intolerancia⁵⁶. En efecto, BFRL afirma que la ley ha obligado a los grupos minoritarios a renunciar a sus características distintivas, sus creencias fundamentales y sus principios para integrarse en la cultura "francesa". BFRL señaló que al menos 48 niños habían sido expulsados de las escuelas desde la aprobación de la ley y destacó que esa cifra no incluía a los niños que han abandonado la escuela después de la prohibición, que se han matriculado en escuelas privadas o que siguen sistema de educación a distancia⁵⁷. El IRPP indicó que estaba de acuerdo con las conclusiones de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, que en su informe sobre Francia de 2006 afirmó que "la ley deniega los derechos de los menores que han decidido, sin que nadie los obligue, llevar un signo religioso en la escuela como parte de sus creencias religiosas" y que "la aplicación de la ley por parte de las instituciones docentes ha dado lugar en varias ocasiones a abusos que han provocado humillación, en particular entre las jóvenes musulmanas". La IHRC también señaló con preocupación que la ley era profundamente discriminatoria y vulneraba los derechos de las muchachas musulmanas que llevan el velo⁵⁸. Observó las consecuencias de la prohibición en el sector público en general y también en el sector privado, incluso casos de despido de mujeres que llevan el velo en guarderías, bancos y organizaciones de derechos humanos. La organización también informó de casos de mujeres que fueron excluidas de un jurado porque llevaban el *hijab* o que se les prohibía la entrada a oficinas de registro civil si se negaban a retirar el *hijab*⁵⁹. La IHRC⁶⁰ y el IRPP⁶¹ recomendaron que, en esas circunstancias, se anulara o modificara la ley. Indicaron que el Ministerio del Interior había anunciado, en 2008, que la Ley de 1905 sería examinada nuevamente para hacerla más flexible y dar mayor libertad a todas las religiones en Francia⁶². Según el IRPP, la población musulmana no es la única que sufre discriminación; los actos de antisemitismo aumentaron en un 6% en Francia en 2006 y también se registró un fuerte aumento de agresiones violentas, de 99 en 2005 a 134 en 2006⁶³.

15. BFRL informó de que en 1995 se había creado en Francia una comisión parlamentaria sobre cultos, que estableció una serie de criterios para identificar las organizaciones que practican la desestabilización psíquica, que reciben contribuciones financieras exageradas, cometen ataques contra la integridad física, reclutan a niños o cometen acciones contra el orden público⁶⁴. La comisión publicó además una lista de 173 grupos identificados como "cultos" que deben ser considerados con prudencia. La comisión basó sus conclusiones en decisiones judiciales y testimonios de antiguos miembros de "cultos", según BFRL. Tras la publicación del informe se creó un órgano gubernamental (su versión actual es la "Misión interministerial de vigilancia y de lucha contra las desviaciones sectarias" -Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires- MIVILUDES) para supervisar las actividades de esos "cultos" religiosos. En 2001 se aprobó la Ley About-Picard que, según BFRL, impuso mayores restricciones a las asociaciones, especialmente los "cultos", y facilitó su disolución. BFRL indicó que los miembros de grupos religiosos minoritarios han señalado muchos casos de discriminación por aplicación de la Ley About-Picard, que afectan igualmente a hijos de miembros de sectas en el sistema escolar. Los grupos identificados en el informe de 1995 siguen afrontando dificultades para construir lugares de culto o expresar sus creencias en público según BFRL⁶⁵. El IRPP observó que esa

Misión interministerial había contribuido a estigmatizar determinadas creencias religiosas en Francia. El IRPP recomienda una reforma de esa organización para garantizar su objetividad y promover la libertad de religión para todos⁶⁶.

16. Según el Centre d'Information et de Conseil des Nouvelles Spiritualités (CICNS), la policía nacional o la gendarmería intervienen desde hace unos 25 años contra personas, familias y asociaciones sospechosas de tener vínculos con una secta⁶⁷. El Mouvement Raëlien Européen (MRE) observó que esa lista se utiliza continuamente para justificar agresiones que causan graves perjuicios contra el Mouvement Raëlien, sus miembros y su fundador, lo que ha contribuido a crear y acentuar un clima de odio hacia las minorías religiosas⁶⁸. Human Rights Without Frontiers International (HRWFI) indicó que tres órganos financiados por el Estado promueven activamente la discriminación religiosa en Francia. Por ejemplo, HRWFI dice que MIVILUDES promueve la discriminación religiosa al estigmatizar grupos religiosos minoritarios. HRWFI indicó que en 2006 la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias pidió a Francia que se abstuviera de "estigmatizar a los miembros de determinadas comunidades o grupos religiosos, que en algunos casos están formados por personas que no han cometido ningún delito tipificado en el derecho francés" y que "velara por que las futuras actuaciones de la MIVILUDES fueran conformes al derecho a la libertad de religión y de creencias y se evitaran los errores del pasado"⁶⁹.

17. La situación general de los medios de comunicación en Francia es satisfactoria según la Oficina del Representante de la OSCE encargado de la libertad de los medios de comunicación. El Representante indicó que había intervenido cinco veces entre enero de 2005 y diciembre de 2007. El Representante observó que las acciones emprendidas para obligar a los periodistas a revelar sus fuentes confidenciales ponen de manifiesto la necesidad de adoptar disposiciones para proteger esas fuentes, como prometió el Presidente Sarkozy el 12 de abril de 2007, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁷⁰.

5. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

18. La CNCDH indicó que se ha ocupado continuamente de la cuestión de la pobreza extrema durante cerca de 20 años. Celebró los progresos recientes con respecto al reconocimiento del derecho a la vivienda, pero observó deficiencias en el ejercicio del conjunto de esos derechos. Habría que adoptar medidas para crear centros de asistencia jurídica, ayudar en las gestiones administrativas y garantizar recursos efectivos⁷¹. DEI considera que una de las prioridades del Estado ha de ser controlar el aumento de la población que vive por debajo del umbral de pobreza⁷².

6. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad

19. La CNCDH participó en la revisión de los programas escolares y la instauración del plan nacional de acción para la educación y la formación en materia de derechos humanos, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas⁷³. DEI observó un desfase entre los programas escolares, que demuestran un interés por la formación de derechos humanos, y su aplicación en el sistema escolar que es muy teórica y está relegada por la enseñanza de las disciplinas "fundamentales"⁷⁴.

7. Minorías y pueblos indígenas

20. la Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados expresó su gran preocupación por la situación de los pueblos indígenas de los departamentos y territorios franceses de ultramar. Según la Asociación, los pueblos indígenas de la Guayana Francesa observan con preocupación que la política francesa de asimilación no tiene en cuenta su cultura, tradición e idioma. Los pueblos indígenas tienen graves problemas de discriminación social y alcoholismo según la Asociación.

La Guayana francesa está considerada como una región de abundantes recursos naturales, explotados de forma legal e ilegal en proporciones que afectan enormemente a los pueblos indígenas⁷⁵. STP afirmó que se habían violado los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Polinesia Francesa. Entre 1966 y 1996 Francia hizo 46 pruebas nucleares y 147 pruebas nucleares subterráneas en los atolones de Moruroa y Fangataufa. Según STP, en las instalaciones de pruebas nucleares trabajaron hasta 15.000 aborígenes maohi, pero las autoridades niegan que las pruebas nucleares hayan tenido consecuencias negativas para la salud⁷⁶ aunque los reconocimientos médicos recientes indican que el 85% de los antiguos trabajadores de esas instalaciones tienen problemas de salud y el 32,4% desarrolló un cáncer. STP informó que los maohi piden que las autoridades francesas levanten el secreto sobre las graves consecuencias médicas de las pruebas nucleares y asuman sus responsabilidades. Recomendaron que se diera atención médica gratuita a los maohi, que se concedieran indemnizaciones por problemas de salud persistentes, esterilidad e incapacidad para trabajar, y que se pagara una pensión a los familiares supervivientes. Observaron que las autoridades francesas se han mostrado renuentes hasta ahora a cumplir los deberes fiduciarios que tienen con los antiguos empleados de las instalaciones de pruebas nucleares⁷⁷.

8. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

21. La CNCDH observó modificaciones frecuentes y sustanciales de la legislación sobre los extranjeros y destacó que nunca había sido consultada por el Gobierno en esa materia; señaló igualmente que la creciente complejidad de la legislación afecta a algunos derechos fundamentales (en particular el derecho de asilo, el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un proceso imparcial). La LDH comparte esa opinión⁷⁸. La CNCDH también expresó su preocupación por el menoscabo de los principios fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (el concepto de países "seguros" y el acceso al procedimiento de asilo); en particular, observó que la solicitud de protección de un creciente número de solicitantes de asilo no se examina de manera imparcial: el acceso al procedimiento normal de instrucción de la demanda es aleatorio y cada vez hay más dificultades para presentar un recurso suspensivo, lo que atenta contra el derecho a un recurso efectivo ante el tribunal nacional de derecho de asilo⁷⁹. La Asociación nacional de asistencia a los extranjeros en las fronteras (ANAFE) recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había constatado, en 2007, que el procedimiento de no admisión de extranjeros en el territorio francés era contrario a los artículos 3 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Además, denunció la falta de un recurso efectivo contra la denegación de entrada al territorio⁸⁰. La FIACAT señaló que el 30,7% de las solicitudes de asilo fueron examinadas por el procedimiento prioritario en 2006⁸¹. Este procedimiento tiene consecuencias sociales (en particular la exclusión del sistema de centros de alojamiento o del subsidio temporal de espera) y afecta al examen de la solicitud de asilo porque no admite recursos suspensivos contra las decisiones negativas de la Oficina francesa de protección de refugiados y apátridas (OFPRA) y el procedimiento acelerado de examen de la solicitud de asilo por la OFPRA⁸².

22. La FIACAT indicó que las reformas sucesivas del procedimiento de solicitud de asilo y de lo contencioso-administrativo habían creado procedimientos expeditivos sin recursos efectivos. Es particularmente preocupante el procedimiento de solicitud de asilo previsto para las personas retenidas en centros de detención administrativa⁸³. La ANAFE observó que en caso de saturación de los centros de alojamiento de carácter hotelero (ZAPI 3 - Zone d'attente pour personnes en instance), estas personas son retenidas en el aeropuerto de Roissy en condiciones inhumanas⁸⁴. La ANAFE observó la retención de 515 menores en la zona de espera del aeropuerto de Roissy en 2006 (a los que hay sumar 89 menores "asimilados a mayores" en 2006 en Roissy), de los cuales 327 fueron expulsados. Según la ANAFE, la retención de un menor en la zona de espera, separado de su familia, es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3 y 37) y el ACNUR la rechaza de forma absoluta. En 2006 el Comisario para los Derechos

Humanos del Consejo de Europa indicó que la ley de admisión en el territorio francés no distinguía entre menores y adultos y que los menores no son admitidos automáticamente. Esta laguna jurídica, que también existe en otros países europeos, es contraria a varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño⁸⁵. Actualmente, según la ANAFE, los niños mayores de 13 años son retenidos en la zona de espera sin separación de los adultos, lo que vulnera las disposiciones de la Convención. Los menores de 13 años están separados de los adultos, pero en condiciones poco claras (lugar desconocido, no se autoriza el acceso de los familiares, del administrador especial ni de la ANAFE, los niños están sometidos al control de personas cuyas garantías no se justifican)⁸⁶. DEI observó igualmente que las consignas del Gobierno para la regularización o el traslado hasta la frontera de los extranjeros en situación irregular, aplicadas por los prefectos, ocasionan violaciones casi cotidianas de los derechos de los niños directamente afectados, en particular desde 2006⁸⁷. Algunas personas afirman que fueron tratadas con violencia por los funcionarios de policía encargados de su expulsión. En 2006 la ANAFE registró 30 testimonios de violencia policial⁸⁸.

9. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

23. HRW indicó que en los últimos cinco años Francia ha expulsado por la fuerza a decenas de residentes extranjeros acusados de tener vínculos con el terrorismo y el extremismo. HRW observó que las cifras oficiales disponibles indican que 71 personas calificadas de "fundamentalistas islámicos" fueron expulsadas por la fuerza de Francia entre 2001 y 2006, y que 15 de ellas fueron identificadas como imanes. Aunque no es una política nueva, las expulsiones por motivos de seguridad nacional forman parte de la actual estrategia nacional de Francia para luchar contra la radicalización violenta y el reclutamiento con fines terroristas, según HRW. Los procedimientos de expulsión por motivos de seguridad nacional no ofrecen garantías suficientes para evitar la vulneración de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a no padecer torturas ni malos tratos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la familia y la vida privada. HRW indicó que su principal motivo de preocupación era que las personas a las que se aplica una medida de expulsión por motivos de seguridad nacional no tienen derecho automáticamente a un recurso en el país. HRW también señaló con preocupación que los procedimientos de expulsión suelen dar lugar a una expulsión administrativa y no al enjuiciamiento penal de los extranjeros acusados de extremismo y de fomentar la radicalización. Según HRW, el recurso a las normas sobre inmigración permite al Gobierno eludir las garantías procesales más rigurosas del sistema de justicia penal. HRW también expresó su preocupación por el hecho de que las expulsiones forzadas pueden afectar al derecho a la familia y la vida privada de los expulsados y sus familiares en contravención de las normas internacionales de derechos humanos⁸⁹.

III. LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES

24. La CNCDH acogió complacida la revisión constitucional de 2007 que establece la abolición de la pena capital en todas las circunstancias (art. 66)⁹⁰. En lo referente a los matrimonios forzados, la CNCDH acogió con interés la modificación de la edad mínima de la mujer para contraer matrimonio, que se elevó a 18 años como en el caso de los hombres⁹¹.

25. El IRPP afirmó que las leyes francesas de protección de la libertad de religión estaban evolucionando. En 2003 se aprobó una ley contra los delitos de carácter "racista, antisemita o xenófobo" y en 2004 la legislación acrecentó las penas para delitos motivados por prejuicios. Según el IRPP, el Gobierno aplica regularmente estas leyes contra los delitos de carácter antisemita. El Presidente de Francia asumió un papel público activo, denunciando y combatiendo el antisemitismo en todas sus manifestaciones, por ejemplo cuando supervisó personalmente el desmantelamiento de un sitio web dirigido por un grupo antisemita⁹².

IV. PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS NACIONALES ESENCIALES

26. AI celebró las promesas hechas por Francia en el Consejo de Derechos Humanos en 2006 y alienta a Francia a informar públicamente sobre el cumplimiento de esas promesas⁹³.

V. FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA

27. AI celebró el compromiso de Francia de elevar su contribución voluntaria al ACNUDH para facilitar la asistencia técnica, así como su promesa de doblar su contribución al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y pide que se confirme si ya se han hecho esas contribuciones o se ha fijado un calendario para hacerlas⁹⁴.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a national human rights institution with "A" status.)

Civil society

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI | Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK)* |
| ANAFE | Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, UPR submission, January 2008, Paris |
| BFRL | The Becket Fund for Religious Liberty, UPR submission, January 2008, Washington DC (USA)* |
| CICNS | Centre d'information et de conseil des nouvelles spiritualités, UPR submission, January 2008, Montpezat de Quercy |
| DEI | Défense des enfants international, section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis* |
| ERM | European Raelian Movement, UPR submission, January 2008, London (UK) |
| FIACAT | Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT-France, UPR joint submission, January 2008, Paris* |
| GIEACPC | Global initiative to End All Corporal Punishment of Children, UPR submission, January 2008, London (UK) |
| HRW | Human Rights Watch, UPR submission, January 2008, New York (USA)* |
| HRWF | Human Rights Without Frontiers, International, UPR submission, January 2008, Brussels (Belgium) |
| | Inter-LGTB L'Interassociative lesbienne, gai, bi et trans, ILGA-Europe, UPR joint submission, January 2008, Paris and Brussels (Belgium)* |
| IHRC | Islamic Human Rights Commission, UPR submission, January 2008, London (UK)* |
| IRPP | Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA) |
| LDH | Ligue des droits de l'homme, Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), UPR submission, January 2008, Paris* |
| OIP | Observatoire international des prisons, section française, UPR submission, January 2008, Paris |
| STP | Society for Threatened Peoples, UPR submission, January 2008, Göttingen (Germany)* Dr. S. Palmer (Concordia University), UPR submission, January 2008, Montreal (Canada) <i>National Human Rights Institution(s)</i> |
| CNCDH | Commission nationale consultative des droits de l'homme, UPR submission, January 2008, Paris** <i>Regional Inter-Governmental Organizations</i> |
| CoE | Council of Europe, UPR Submission, January 2008: <ul style="list-style-type: none">- Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on the effective respect for human rights in France following his visit from 5 to 21 September 2005, Council of Europe, 2006- Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) du 27 septembre au 9 octobre 2006, Conseil de l'Europe, 2007- Réponses du Gouvernement de la République française au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) relatif à la visite effectuée en France du 27 septembre au 9 octobre 2006, Conseil de l'Europe, 2007 |

- European Commission against Racism and Intolerance, Third report of France, adopted on 25 June 2004, Council of Europe, 2005
- Letter dated 20 February 2006 from France to the Council of Europe
- Letter dated 7 April 2006 from France to the Council of Europe
- Ratifications: France
- Council of Europe: main Pending cases against France

OSCE RFOM Organization for Security and Co-operation in Europe, Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media, UPR Submission, January 2008

² Défense des enfants international, section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.1.

³ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 1

⁴ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 1

⁵ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.

⁶ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.

⁷ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 1.

⁸ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.

⁹ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.

¹⁰ Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.1.

¹¹ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 2.

¹² Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, pp. 3-4.

¹³ Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.3.

¹⁴ L'interassociative lesbienne, gai, bi et trans, ILGA-Europe, UPR submission, January 2008, Paris and Brussels (Belgium), p. 1.

¹⁵ Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.3.

¹⁶ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 2.

¹⁷ Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.3.

¹⁸ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.

¹⁹ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, pp. 3-4.

²⁰ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.

²¹ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 4.

²² Council of Europe, UPR submission, January 2008, Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on the effective respect for human rights in France, following his visit from 5 to 21 September 2005, p. 100.

²³ Islamic Human Rights Commission, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 2.

²⁴ L'interassociative lesbienne, gai, bi et trans, ILGA-Europe, UPR submission, January 2008, Paris and Brussels (Belgium), p. 1.

²⁵ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 4.

²⁶ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 4.

²⁷ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.

²⁸ Observatoire international des prisons, section française, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.

²⁹ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.

³⁰ Observatoire international des prisons, section française, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.

- ³¹ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.
- ³² Observatoire international des prisons, section française, UPR submission, January 2008, Paris, pp. 1-2.
- ³³ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 2.
- ³⁴ Observatoire international des prisons, section française, UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ³⁵ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 2.
- ³⁶ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 2.
- ³⁷ Conseil de l'Europe, UPR soumission, January 2008, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 septembre au 9 octobre 2006, p.11.
- ³⁸ Conseil de l'Europe, Réponse du Gouvernement de la République française au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite effectuée en France du 27 septembre au 9 octobre 2006, p. 25-26.
- ³⁹ Council of Europe, UPR submission, January 2008, Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on the effective respect for human rights in France, following his visit from 5 to 21 September 2005, p. 96
- ⁴⁰ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), pp. 3-4.
- ⁴¹ Ligue des droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), UPR submission, January 2008, Paris, pp. 1-2.
- ⁴² Human Rights Watch, UPR submission, January 2008, New York (USA), pp. 4-5.
- ⁴³ Human Rights Watch, UPR submission, January 2008, New York (USA), p. 4.
- ⁴⁴ Human Rights Watch, UPR submission, January 2008, New York (USA), pp. 5-6
- ⁴⁵ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 5.
- ⁴⁶ Global initiative to End All Corporal Punishment of Children, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 2.
- ⁴⁷ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ⁴⁸ Ligue des droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.
- ⁴⁹ Observatoire international des prisons, section française, UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ⁵⁰ Ligue des droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.
- ⁵¹ Council of Europe, UPR submission, January 2008, Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on the effective respect for human rights in France, following his visit from 5 to 21 September 2005, para. 11.
- ⁵² Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.
- ⁵³ Ligue des droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), UPR submission, January 2008, Paris, pp. 2-3.
- ⁵⁴ Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), p. 1.
- ⁵⁵ The Becket Fund for Religious Liberty, UPR submission, January 2008, Washington DC (USA), pp. 1-2.
- ⁵⁶ Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), p. 1.
- ⁵⁷ The Becket Fund for Religious Liberty, UPR submission, January 2008, Washington DC (USA), pp. 2-3.
- ⁵⁸ Islamic Human Rights Commission, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 3.
- ⁵⁹ Islamic Human Rights Commission, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 3.
- ⁶⁰ Islamic Human Rights Commission, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 4.
- ⁶¹ Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), pp. 2-3.

- ⁶² Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), p. 1.
- ⁶³ Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), p. 4.
- ⁶⁴ The Becket Fund for Religious Liberty, UPR submission, January 2008, Washington DC (USA), p. 4.
- ⁶⁵ The Becket Fund for Religious Liberty, UPR submission, January 2008, Washington DC (USA), pp. 4-5. See also Prof. S. Palmer (Concordia University), UPR submission, January 2008, Montreal (Canada), p. 1.
- ⁶⁶ Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), p. 3.
- ⁶⁷ Centre d'Information et de Conseil des Nouvelles Spiritualités, UPR submission, January 2008, Montpezat de Quercy, p. 1.
- ⁶⁸ European Raelian Movement, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 2.
- ⁶⁹ Human Rights Without Frontiers, International, UPR submission, January 2008, Brussels (Belgium), pp. 1-2.
- ⁷⁰ Organization for Security and Co-operation in Europe, Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media, UPR Submission, January 2008, pp. 1-2.
- ⁷¹ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.
- ⁷² Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p. 5.
- ⁷³ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 5.
- ⁷⁴ Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.4.
- ⁷⁵ Society for Threatened Peoples, UPR submission, January 2008, Göttingen (Germany), p. 1.
- ⁷⁶ Society for Threatened Peoples, UPR submission, January 2008, Göttingen (Germany), p. 2.
- ⁷⁷ Society for Threatened Peoples, UPR submission, January 2008, Göttingen (Germany), p. 2.
- ⁷⁸ Ligue des droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ⁷⁹ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 4.
- ⁸⁰ Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, UPR submission, January 2008, Paris, pp. 5-6.
- ⁸¹ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ⁸² Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 4.
- ⁸³ Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la Torture, ACAT-France, UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ⁸⁴ Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, UPR submission, January 2008, Paris, p. 4.
- ⁸⁵ Council of Europe, UPR submission, January 2008, Report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on the effective respect for human rights in France, following his visit from 5 to 21 September 2005, para. 287
- ⁸⁶ Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, UPR submission, January 2008, Paris, pp. 4-5.
- ⁸⁷ Défense des Enfants International, Section française, UPR submission, January 2008, Saint-Denis, p.2.
- ⁸⁸ Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, UPR submission, January 2008, Paris, pp. 6-7.
- ⁸⁹ Human Rights Watch, UPR submission, January 2008, New York (USA), pp. 1-4.
- ⁹⁰ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 1.
- ⁹¹ Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, UPR submission, January 2008, Paris, p. 3.
- ⁹² Institute on Religion and Public Policy, UPR submission, January 2008, Washington (USA), p. 4.
- ⁹³ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 5.
- ⁹⁴ Amnesty International, UPR submission, January 2008, London (UK), p. 5.